

Conclusiones a las Jornadas de El Escorial sobre el Proyecto de Ley de Reforma de los Colegios Profesionales.

1. El Proyecto de Ley de Reforma de los Colegios Profesionales, redactado en base al Informe del Tribunal de Defensa de la Competencia, de junio de 1.992, responde a claves del liberalismo económico radical, que postula como motor del desarrollo la competencia económica, sin limitación alguna, y deja en la indefensión absoluta a los más débiles frente a los más fuertes, despreciando toda consideración cualitativa y ética.

Plantear la competitividad en el único terreno de lo económico, no es sino una falacia que ignora el valor de la calidad como factor positivo de la competencia, tal como en la actualidad la contemplan los códigos deontológicos profesionales, que en el caso de los arquitectos se refuerza con la existencia de tarifas oficiales, de aplicación general, para la valoración del trabajo de todos los profesionales.

Al anteponer, por exclusión, los factores cuantitativos a los cualitativos, se abren las puertas a toda competencia ilegítima que atienda tanto a la oferta, a la baja económica, y no a la calidad de los productos ofrecidos por la capacidad y el esfuerzo profesional, así como al abuso de ciertos promotores irresponsables, sólo atentos al coste, y no a la calidad.

2. Por otra parte, presentar los honorarios de los arquitectos como factor determinante del encarecimiento de las obras, —cuando no superan, como media, el 3 por

mil del precio de venta en mercado—, en que inciden más decisivamente los precios del suelo y de la construcción, no es sino una dolorosa deformación de la realidad, en contra del prestigio de la profesión de los arquitectos.

Cuando lo cierto es que la reducción de este porcentaje —que en su caso límite supondría admitir honorarios nulos— no influiría prácticamente en la resolución económica del grave problema de la vivienda, que tanto preocupa a la sociedad española.

Al margen de ello, conviene recordar que los honorarios de los arquitectos españoles, son los menores de cuantos se aplican, por un mecanismo, u otro, en la mayoría de los países de la Comunidad Europea; lo cual no impide que la organización colegial española se siga considerando como modélica y deseable por la gran mayoría de los arquitectos de Europa, no por privilegios que no existen, sino por la afirmación del derecho del trabajo profesional y la transparencia en las relaciones económicas y fiscales.

3. No queremos sin embargo, centrar este documento tan sólo en razonamientos económicos, que demasiadas veces parecen ser en el contexto español la única medida para valorar la bondad de los comportamientos y decisiones sociales, profesionales y personales.

Mucho más grave y preocupante que la repercusión económica del Proyecto de Ley sería, sin duda, su incidencia en la baja de calidad que habría de generar en la Arquitectura española, de igual manera que, la aplicación de medidas paralelas, ha producido ya en otras Arquitecturas de Europa.

turas de Europa.

los ejemplos de Italia y Chile, donde se está en vías de reconducir la situación, regresando a ordenamientos colegiales anteriores —semejantes a las que ahora se pretende destruir en España—, o el de Inglaterra, por otras razones, no dejan de ser altamente significativas y alarmantes.

En todos estos casos y en otros que podrían señalarse, la desaparición del arquitecto libre, regido en su actividad por la Ley de la competencia en la calidad, y no por la competencia económica, dejaría el campo expedito para la presión abusiva, especialmente sobre los Arquitectos más indefensos —que son en este caso los más jóvenes y los recién egresados— que, para conseguir trabajo se verían obligados a aceptar situaciones asalariadas que les harían perder su libertad creativa, frente a algunos patronos menos escrupulosos, que les impondrían sus criterios, o les llevarían a tener que aceptar trabajo no asalariado en condiciones de presión económica, pero incompatibles con su dignidad y libertad profesional.

4. No queremos tampoco dejar de señalar que el Proyecto de Ley, al someter a los profesionales colegiados a la Ley 16/1.989, incurre en el mismo error del Informe del Tribunal de Defensa de la Competencia, al considerar el ejercicio profesional como mera actividad comercial, sujeta a la economía de mercado —cuya libertad reconoce el Art. 38 de la Constitución— siendo así que la propia Constitución, en su Art. 36, excluye a las profesiones tituladas, reconociendo a los Colegios Profesionales unas

Conclusions of the El Escorial Conference on the Projected Law for the Reform of Professional Associations

1. The Projected Law for the Reform of Professional Associations, written on the basis of the Report of the Council for Competition in June, 1992, is composed in the key of radical economic liberalism, which postulates limitless competition as the motor of economic competitiveness, and leaves the weak absolutely defenseless in front of the strong, discarding any and all qualitative and ethical considerations.

To impose competition singly in the economic domain is a fallacy which ignores the value of quality as a positive factor in competition, as it is currently conceived by the professional deontological codes, which is reinforced in the case of architects by the existence of official rates, applied generally, for the valuation of the work of all professionals.

To prioritize, exclusively, quantitative factors over qualitative ones, would open the gates to all sorts of illegitimate competition, particularly those types interested only in what is on offer, and what the market will bear, and does not attend to the quality of the products offered by professional capabilities and efforts, in this way emulating the abuse of those irresponsible developers who are only concerned with cost and not with quality.

2. At the same time, to present architects' honorariums as the determining factor in the expense of construction works —when they do not exceed, on

average 3 out of every 1,000 units of market price—an expense in which the prices of land and construction impinge much more decisively, is a deceitful deformation of reality, contrary to the prestige of the architectural profession.

It is clear that the reduction of this percentage —whose extreme case would entail eliminating honorariums altogether— will have practically no influence in the economic resolution of the serious housing problem that so plagues Spanish society.

It is also appropriate to recall that the honorariums of Spanish architects are less than those that, by one way or another, are applied in most of the other countries in the European Community; this, however, does not prevent the Spanish associations from being consistently seen as desirable models by the great majority of the architects practising in Europe— not for privileges which do not exist, but rather for the affirmation of the right to professional work and to transparency in economic and financial relations.

3. Nonetheless, we do not want this document to focus merely on economic reasonings, which too often seem to be the only means in the Spanish context to evaluate the worth of social, professional and personal behaviour and decisions.

Without a doubt, the far more grave and worrying economic repercussion of the Projected Law would be its inevitable effect of lowering the quality of Architecture in Spain, an effect already produced by the application of analogous measures in other Architecture of Europe.

The examples of Italy and Chile, two countries in the

process of re-directing the situation, regressing to earlier associational regulations —similar to those whose destruction is sought in Spain— or of England, for other reasons, continue to be highly significant and alarming.

In all of these cases and in still others which might be mentioned, the disappearance of the architect as a liberal professional, whose activity is ruled by the competitive Law of quality and not by purely economic competition, would promptly leave the field open to abusive pressure, especially on the more defenseless architects —who in this case would be the young and recently graduated architects— who, in order to get work, would be obliged to accept salaried situations implying the forfeiting of their creative freedom to various less scrupulous patrons, who would impose their criteria and would force them to accept unsalaried work in conditions of economic pressure, incompatible with their professional dignity and liberty.

4. We also do not want to pass over the fact that the Projected Law, by subjecting Professional Associations to Law 16/1989, commits the same error as the Report of the Council for Competition, that is, it considers the exercise of a profession as a merely commercial activity, thus subject to the market economy —a free market as recognized by Article 38 of the Constitution— while the same Constitution, in Article 36, excludes titled professionals from this condition, recognizing Professional Associations as particularities of their own nature, and hence distinct from entrepreneurial entities.

In reality, the Constitution, considers professional work to be a modality of work in general —Articles 35

peculiaridades propias y, por tanto, distintas a las de los empresarios.

En realidad, configura el trabajo profesional como una modalidad del trabajo en general —Arts. 35 y 37— y por consiguiente autoriza la fijación de unos emolumentos mínimos establecidos por Tarifas Oficiales de Honorarios, que hacen la función de negociación colectiva.

5. Es evidente que, el Proyecto de Ley de Reforma de los Colegios Profesionales —y no sólo de arquitectos— a quienes menores daños causaría, sería a los profesionales mejor situados, ya sea por posición económica o por su prestigio profesional, adquirido con anterioridad a la eventual entrada en vigor de la Ley nacida del Proyecto que analizamos.

La corrupción profesional sería la consecuencia directa de tal situación, como demuestra la reciente experiencia inglesa.

6. Quienes refrendamos este escrito, no ignoramos que la situación de los Colegios de Arquitectos, y sin duda de los demás Colegios afectados por el Proyecto de Ley, puede mejorarse, pero no podemos ignorar que estas mejoras no llegarían ciertamente, por el camino que el Proyecto contempla, muy al contrario, se agravarían sin que se produjera ventaja alguna.

El camino a recorrer es otro muy distinto: es preciso impulsar a los profesionales la necesidad de aumentar las cotas de su responsabilidad ética; estudiar cómo potenciar más justos medios, para poder afrontar los gastos de la modernización de sus equipos de trabajo, y alcanzar mayores niveles de eficacia.

and 37— and therefore authorizes the fixing of minimal emoluments established by Official Honorarium Rates, which perform the function of collective negotiation.

5. It is clear that the Projected Law for the Reform of Professional Associations —and not only those of architects— will impinge less perniciously on those professionals who are better situated, be it for their economic position or their professional prestige that they acquired prior to the entrance in vigour of the Law born from the Proposal here under scrutiny.

The direct consequence of such a situation would be professional corruption, as the recent English experience demonstrates.

6. We who countersign this text do not ignore nor deny that the Architects' Associations, and doubtless other Associations affected by the Projected Law, can be improved, but we are clearly aware that these improvements will not be achieved by the route contemplated in the Projected Law, but, quite to the contrary, the Associations will only get worse without any concomitant advantages whatsoever.

The appropriate path to take is very distinct from the one proposed: it is essential that professionals be impelled to raise the standards of their ethical responsibility, and to study how to empower more just means in order to handle the costs of the modernization of their teams and outfits and achieve greater levels of efficacy.

7. We cannot remain silent and hushedly condone the serious damages that the new Projected Law would inflict on society, nor can we contribute to the vilification

7. No podemos, con nuestro silencio, acallar los graves daños que para la sociedad ofrece el nuevo Proyecto, ni contribuir al envilecimiento de nuestra profesión, aceptando, dócilmente, que la competitividad económica a la baja sea preferible a la saludable competitividad basada en la calidad de la obra bien hecha.

Ni queremos tampoco hacernos cómplices de un proceso de deterioro de la Arquitectura de Europa, respaldando un camino que no sólo no debe ampliarse, sino que debe reducirse en beneficio del patrimonio arquitectónico europeo y de su enriquecimiento hacia el futuro.

8. Queremos dejar muy claro que, con nuestra posición, no defendemos tan sólo a los arquitectos y sus legítimos derechos, sino también, a cuantos profesionales son agredidos por el Proyecto de Reforma de los Colegios Profesionales, como también, y principalmente, al conjunto de la sociedad civil y de sus intereses, así como defender el común patrimonio de la Arquitectura del futuro y su derecho a ser amparada más allá de los límites de lo económico, para que siga siendo el constante valor de cultura que siempre ha sido.

9. Desde nuestra leal y próxima visión de los problemas de nuestra profesión, que existen y deben ser corregidos, dentro del marco legal de nuestros colegios y de nuestro Consejo Superior, queremos ofrecer nuestro esfuerzo desde la verdad y no desde la pasividad complaciente. Y por ello afirmamos, que el Proyecto que rechazamos no es la vía adecuada para corregir nuestros yerros, ni para construir eficazmente, desde nuestro campo específico, la Europa fraterna, plural y solidaria que todos deseamos.

of our profession by docilely accepting that unregulated market competition is preferable to the healthy competition based on the quality of the well made work.

Neither do we want to be accomplices to a process of deterioration in the Architecture of Europe; we do not want to support or accept a path that not only should not be extended, but that ought to be curtailed in favour of the European architectural patrimony and its future enrichment.

8. We want to make very clear that, with our position, we do not seek only to defend architects and their legitimate rights, but also other professionals under assault by the Projected Law for the Reform of Professional Associations, and also and mainly to defend civil society and its interests as a whole, as well as the common Architectural patrimony of the future and its right to be protected beyond the limits of purely economic rationality, in order that it continue to be the constant cultural value that it has always been.

9. From our faithful and close-up vision of the problems of our profession, which do exist and ought to be corrected, but within the legal framework of our Associations and our Higher Council, we would like to offer our efforts on the basis of truth and not on that of complacent passivity. For this reason we affirm, with all of our energy, that the Projected Law herein rejected is not the adequate method to correct our faults, nor is it the way to assist in the construction, from our specific field, of the fraternal, plural and solidary Europe that we all wish.

10. For all of the reasons above, we who support this

10. Por todo ello, quienes respaldamos este escrito solicitamos del Gobierno español y del Conjunto de las fuerzas políticas con representación parlamentaria que reconsideren y reconduzcan el presente Proyecto de Ley para la salvaguarda de los valores culturales que la Arquitectura encarna, al tiempo que hacemos un llamamiento a la sociedad, para que se manifieste en defensa de un patrimonio común. También recabamos la presencia de los Colegios Oficiales de Arquitectos en los organismos públicos y privados, donde la arquitectura se genera.

Este documento ha sido redactado y refrendado en El Escorial a 19 de Noviembre de 1992 por: D. Luis del Rey, *Decano del COAM*, John Bartlett, *Presidente de la Ciudad de Londres y Westminster del RIBA*, D. Julio Cano Lasso, *Dr. Arquitecto y Académico de Bellas Artes de San Fernando*, D. Gian Carlo Capolei, *Presidente Orden de Arquitectos de Roma*, D. Luigi Moretti, *Vice-Presidente de Orden de Arquitectos de Roma*, D. Julio Caro Baroja, *Académico de la Real Academia de la Historia y de la Real Academia de la Lengua Española y Colegiado de Honor del COAM*, D. Javier Carvajal Ferrer, *Dr. Arquitecto y Catedrático de la Universidad de Navarra*, D. Fernando Chueca Goitia, *Dr. Arquitecto y Académico de Bellas Artes y de la Real Academia de la Historia*, D. Jaime Gil Robles, *Letrado del Colegio de Abogados de Madrid*, D. Antonio Lamela Martínez, *Dr. Arquitecto*, D. Fernando Merino de la Cerda, *Miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Arquitectos de Santiago de Chile*, D. Ramón Parada, *Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad a Distancia*, D. Rafael de la Hoz Arderius, *Dr. Arquitecto y Académico de Bellas Artes de San Fernando*.

text ask the Government of Spain and the political entities represented in the Parliament to reconsider and re-direct the Projected Law, in order to safeguard the cultural values that Architecture embodies. At the same time we call for society to demonstrate in the defense of a common patrimony. We also ask for the presence of the Official Associations of Architects in the public and private organisms in which and through which architecture is generated.

This document has been composed and countersigned in El Escorial on November 19, 1992 by the following: D. Luis del Rey, *Dean of the COAM*, John Bartlett, *President of the City of London and Westminster's chapter of the RIBA*, D. Julio Cano Lasso, *Dr. Architect and Fellow of Bellas Artes de San Fernando*, D. Gian Carlo Capolei, *President of the Order of Architects of Rome*, D. Luigi Moretti, *Vice-President of the Order of Architects of Rome*, D. Julio Caro Baroja, *Fellow of the Royal Academy of History and of the Royal Academy of the Spanish Language and Honorary Associate of the COAM*, D. Javier Carvajal Ferrer, *Dr. Architect and Professorial Fellow of the University of Navarra*, D. Fernando Chueca Goitia, *Dr. Architect and Fellow of Bellas Artes and of the Royal Academy of History*, D. Jaime Gil Robles, *Titular of the Association of Lawyers of Madrid*, D. Antonio Lamela Martínez, *Dr. Architect*, D. Fernando Merino de la Cerda, *Member of the Governing Council of the Association of Architects of Santiago de Chile*, D. Ramón Parada, *Professorial Fellow of Administrative Law at the Universidad a Distancia*, D. Rafael de la Hoz Arderius, *Dr. Architect and Fellow of Bellas Artes de San Fernando*.